

NOMENCLATURA :1. [40]Sentencia
JUZGADO : 20° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-38679-2018
CARATULADO : CURTIDOS BAS S.A./ SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE SALUD METROPOLITANA

Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS.

A folio 1, comparece don Luis Fernando Bas González, ingeniero civil, en representación de CURTIDOS BAS S.A., sociedad del giro de su denominación, rol único tributario N° 93.111.000-4, ambos domiciliados en Cerro Sombrero N° 610, comuna de Maipú, quien en conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Código Sanitario, interpone reclamación judicial en contra de la sanción aplicada a su representada por la Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, doña Rosa Oyarce Suazo, ignora profesión u oficio, domiciliado en Paseo Bulnes N° 164, Santiago, consistente en una multa administrativa ascendente a 300 UTM, la que fue aplicada mediante sentencia dictada por resolución exenta N° 005356, de fecha 07 de Agosto de 2018, recaída en el Sumario Sanitario N° 98/2018, la que fue rebajada a 200 UTM mediante resolución N° 007791, de fecha 16 de Noviembre de 2018, la que fue notificada a mi representada con fecha 29 de Noviembre pasado, en virtud a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que expone en su reclamación.

A folio 5, consta la notificación del demandado.

A folio 12, se llevó a cabo el comparendo de estilo, se contestó la demanda por escrito que rola a folio 8 y llamadas las partes a conciliación, esta no se produjo.

A folio 13, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos controvertidos que rolan en autos.

A folio 45, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO.

PRIMERO. Que, el reclamante expone que la sentencia impugnada, al resolver el sumarios seguido en contra de su representada, derivado del accidente con resultado de muerte sufrido por don Gabriel Urzúa, dispuso lo siguiente: a) Aplicar a su representada una multa ascendente a 300 U.T.M; b) Aplicar a la otra sumariada, la empresa Marcos Simón Zambón Berlagosky, una multa ascendente a 200 U.T.M; c) Ratificar todo lo obrado por los funcionarios Inspectores de la Secretaría regional Ministerial de Salud; d) Apercibir a su representada con nuevas multas y demás sanciones en caso de reincidencia o incumplimiento; e)



Posteriormente, mediante resolución N°007791, de fecha 16 de Noviembre de 2018, resolviendo el recurso de reposición interpuesto por su representada en contra de la sentencia, se rebajó la multa aplicada a ésta a la suma de 200 UTM.

La multa y demás sanciones establecidas en la sentencia que resolvió el sumario sanitario, ratificada por la resolución N° 7791, se fundan en que a juicio de la autoridad sanitaria, los hechos consignados en el sumario sanitario constituirían una infracción a lo establecido en los artículos 3, 36 y 37 del D.S 594/99 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, los que respectivamente disponen:

- Artículo 3 del D.S 594/99: "La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, sean éstos dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella".
- Artículo 36 del D.S. 594/99: "Los elementos estructurales de la construcción de los locales de trabajo y todas las maquinarias, instalaciones, así como las herramientas y equipos, se mantendrán en condiciones seguras y en buen funcionamiento para evitar daño a las personas".
- Artículo 37 del D.S 594/99: "Deberá suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores".

Por otra parte, la sentencia impugnada, ratificada por la resolución N° 7791, estableció como sus principales fundamentos los siguientes:

- a) Que existió falta de control por parte de ambas empresas sumariadas, no considerando los factores de riesgo asociados a la intervención de terceros en el perímetro de seguridad asociado a la maniobra de izaje de carga superiores a 20 toneladas.
- b) No existía al momento del accidente permisos asociados a las tareas críticas de izaje de cargas.
- c) No existía al momento de accidente, análisis seguros de los trabajos que se realizaría con antelación a la ejecución de los mismos, identificando peligros y evaluando los riesgos de la actividad, considerando los factores externos.
- d) No existía el momento de accidente un registro de capacitación del procedimiento de izaje de carga de trabajadores que realizaban dicha actividad.



- e) No se presentó registro de mantención periódica del equipo grúa pluma, en específico gancho de elevación y su respectiva memoria de resistencia de la empresa Zambón Berlagosky.
- f) Falta de evaluación y planificación en el traslado de mesa metálica, no considerando factores de inclinación y desestabilización producto de la metodología de amarre de eslinga a la estructura y factores externos.
- g) Procedimiento de trabajo seguro para maniobras de izaje no considera delimitación y/o segregación de la zona de seguridad, de manera de advertir los trabajos críticos y peligros del lugar.
- h) Falta de supervisión directa en la maniobra de izaje.
- i) Que las condiciones constadas por la Autoridad Sanitaria en las instalaciones de la sumariada se erigen como condiciones básicas de los lugares de trabajo para suprimir o morigerar los factores de riesgo para la salud e integridad física de los trabajadores, los cuales deben existir con antelación a la fiscalización, no bastando con proceder a ejecutar una mera adecuación reactiva a las condiciones de trabajo, dadas las indicaciones efectuadas por el Inspector de la Secretaría, toda vez que ello da cuenta de la falta de diligencia en la mantención permanente del buen estado en que deben encontrarse dichos lugares.
- j) Que bastará para dar por establecida la existencia de una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios el acta levantada por el Funcionario del Servicio de Salud.
- k) Por su parte, la resolución N° 7791, que resolvió el recurso de reposición presentado por su representada en contra de la sentencia, rebajó el monto de la multa a 200 UTM, ratificándola en todo lo demás, estableció que los antecedentes aportados por su parte, permiten morigerar su responsabilidad, no obstante reiterar que los lugares de trabajo deben mantenerse en buenas condiciones, así como suprimirse los factores de peligro, además de indicar que la multa aplicada se encuentra dentro de los rangos establecidos en la legislación sanitaria.

A continuación, advierte que de la mera lectura de la sentencia en cuestión, confirmada por la resolución N° 7791, se desprende que en ella se cometieron los siguientes errores y contradicciones, los que constituyen motivo suficiente para dejarla sin efecto.

1.- Contradicción entre la existencia de una relación a honorarios y los cargos formulados en contra de su representada. Relación de naturaleza civil y no laboral.



Hace presente, que una de las principales defensas expuesta en el escrito de descargos presentado por su parte en el sumario sanitario, indicó que entre su representada y la persona accidentada no existió relación de naturaleza laboral, de manera tal que si no existió dicha relación, no son aplicables en este caso y respecto de la reclamante, las normas de higiene y seguridad contenidas en la legislación laboral y de seguridad social, entre otras, en el Código del Trabajo, la Ley 16.744 y los Decretos N° 40 y 574, como tampoco la Seremi tiene competencia para la investigación y sanción de accidentes no laborales.

Agrega, que también se indicó en el escrito de descargos que tampoco existió relación de subcontratación entre su representada y don Alfredo Sanhueza o la empresa de Grúas Marzan, respecto de las cuales sólo se celebraron contratos civiles para la prestación de servicios específicos y esporádicos, que no son propios del giro de su empresa, por lo que no se cumple con los requisitos establecidos en los artículos 183 A y siguientes del Código del Trabajo para la existencia de trabajo en régimen de subcontratación.

Indica, a propósito de lo señalado anteriormente, que la sentencia impugnada contiene una evidente e irremediable contradicción, consistente en que por un lado reconoce expresamente que entre las partes existió una relación de tipo civil, a honorarios, mientras que por otro, condenó al pago de una multa a su representada, fundada en incumplimiento de normas que son sólo aplicables en el estatuto laboral.

En este sentido, hace presente que en la sentencia se reconoce expresamente que en el acta de inspección se estableció que no existió una relación laboral entre su representada y la persona fallecida, como tampoco existió tal relación entre dicha persona y don Alfredo Sanhueza, quién es sindicado en la propia acta como la persona que contrató a la persona fallecida para que prestara servicios, estableciéndose por el contrario en el acta, respecto de dicha persona, que fue *“trabajador honorario por boleta de prestación de servicio, contratado por el señor Alfredo Sanhueza, quién es el que genera boleta de prestación de servicio con la empresa Curtidos Bas”*, lo cual se contradice con la parte resolutive de la sentencia, que condenó a su parte al pago de una multa de 300 UTM, posteriormente rebajada a 200 UTM, fundado en el supuesto incumplimiento de normas que son sólo aplicables en el marco de una relación de naturaleza laboral, que en este caso la propia acta de inspección, que fue citada y valorizada en la sentencia, descarta.

Insiste, en consecuencia, que la sentencia impugnada se contradice, por cuanto si la persona fallecida se relacionó con don Alfredo Sanhueza en el marco de un



contrato a honorario por boletas de prestación de servicios -tal como se señala en el acta de inspección-, no es posible aplicar a su parte normas que son propias y excluyentes del estatuto laboral.

2.- Error en no atribuir responsabilidad a la persona que contrató los servicios de persona fallecida

Refiere en segundo término, que la sentencia impugnada, ratificada por la resolución N° 7791, contiene otro evidente error, cual es que ni en ella ni en el acta de inspección se indicó el tipo de responsabilidad o participación que se le atribuye a su representada en las deficiencias constatadas a las normas de higiene y seguridad, debiendo, en cualquier caso, entenderse que dicha responsabilidad no sería directa, como empleador de la persona fallecida, sino que aparentemente en virtud de un trabajo en régimen de subcontratación, donde la reclamante, según lo dispuesto en artículo 183 A del Código del Trabajo, habría tenido la calidad de dueña de la obra o faena donde prestó sus servicios la persona fallecida.

Y en este aspecto se advertiría un segundo error del sumario sanitario, cual es no presentar cargos ni condenar a la persona que, según lo indicado en la propia acta de inspección, habría tenido la calidad del empleador directo de la persona fallecida, que en este caso corresponde a don Alfredo Sanhueza, quién contrató para que lo ayudara a realizar los servicios y quién se habría comprometido a pagar por ellos.

De esta manera, la sentencia impugnada no se ajustaría a derecho, por cuanto no puede imputar responsabilidad a su representada, aparentemente en su supuesta calidad de empresa principal, si no imputó previamente responsabilidad al supuesto empleador directo de la persona fallecida, y quién sería el principal responsable en asegurar la salud de sus trabajadores.

3.- Error en cuanto a la multa aplicada a las empresas sumariadas. Grado de participación en las deficiencias constatadas.

Señala que este error consistía en haber aplicado a su representada una multa de igual valor respecto de la multa impuesta a la otra empresa sumariada, Marcos Zambón Berlagosky, no obstante que prácticamente la totalidad de las supuestas deficiencias constatadas, tanto en el acta de inspección como en la sentencia impugnada, son sólo aplicables a ésta última empresa y no a su parte.

En efecto, de las 11 deficiencias constatadas en el acta, sólo una se refiere a una deficiencia que se constató respecto de su representada, correspondiente ésta a



la del N° 2 del acta, mientras que las 10 deficiencias restantes son aplicables solamente respecto de la otra empresa sumariada, motivo por el cual debe concluirse que la sentencia impugnada fue dictada infringiendo principios de razonabilidad y proporcionalidad, al aplicar respecto de la reclamante una multa de igual valor a la establecida respecto de la otra empresa sumariada, que corresponde a la empresa a la que más infracciones le fueron constatadas. En consecuencia, en caso de no ser dejada sin efecto la multa reclamada, en cualquier caso debe accederse a la rebajar el monto de la multa en forma proporcional a las deficiencias constatadas respecto de su parte.

A continuación, se refiere a las supuestas deficiencias establecidas en el Acta inspectiva, las cuales consistirían en las siguientes:

- 1) Empresa Zambón Berlagosky no contaba al momento de accidente con registro de verificación de las condiciones de estados operativos de eslingas, estrobos, grilletes, antes de iniciar los trabajos de izaje de la carga.
- 2) Falta de control por parte de ambas empresas al momento del accidente, no considerando los factores de riesgo asociados a la intervención de terceros en perímetro de seguridad asociados a la maniobra de izaje de cargas superiores a 20 toneladas.
- 3) No existía al momento del accidente permisos de trabajo asociados a tareas críticas de izaje de carga.
- 4) No existía al momento del accidente, previo a realizar los trabajos de izaje, análisis seguro de los trabajos (AST), identificando peligros y evaluando los riesgos de la actividad, considerando factores externos.
- 5) No existía al momento del accidente registro de capacitación de procedimiento de izaje de cargas a los trabajadores que realizaban dicha actividad.
- 6) Matriz de identificación de peligros y evaluación de los riesgos de la empresa Zambón Berlagosky no consideraba en las maniobras de izaje de materiales los peligros y riesgos inherentes a dicha actividad.
- 7) No se presenta registro de mantención periódica del equipo grúa pluma, en específico gancho de elevación y su respectiva memoria de resistencia de la empresa Zambón Berlagosky.
- 8) Falta de evaluación y planificación en el traslado de mesa metálica, no considerando factores de inclinación y desestabilización producto de la metodología de amarre de eslingas a estructuras y factores externos.



9) Procedimiento de trabajo seguro para maniobras de izaje no considera delimitación y segregación de la zona de seguridad, de manera de advertir a los trabajadores los trabajos críticos y peligros del lugar.

10) No presenta la empresa Zambón Berlagosky programa de mantención de equipos de grúa pluma.

11) Falta de supervisión directa en maniobras de izaje de cargas con el fin de controlar los factores de riesgo internos y externos.

Advierte, que de la lectura de las supuestas deficiencias constatadas en el acta, se puede concluir equívocamente lo siguiente:

a) De las 11 supuestas deficiencias constatadas, sólo 1 se refiere a una deficiencia que se constató supuestamente respecto de su representada, correspondiente ésta a la del N° 2 del acta.

b) De las 11 supuestas deficiencias constatadas, 4 se refieren expresamente a deficiencias constadas únicamente a la empresa Zambón Berlagosky, correspondiendo éstas a las deficiencias N°s 1, 6, 7 y 10 del acta.

c) Las restantes 6 supuestas deficiencias constatadas, correspondiente a las de los N°s 3, 4, 5, 8, 9 y 11 del acta, si bien no mencionan expresamente a ninguna de las empresas sumariadas como responsables, deben entenderse también constatadas en contra de la empresa Zambón Berlagosky, por cuanto todas ellas, sin excepción, se refieren a exigencias, permisos y programas de capacitación aplicables sólo a dicha empresa, correspondiendo a documentación que no fue solicitada a su representada.

d) El acta no estableció deficiencias ni citó a formular descargos a don Alfredo Sanhueza, pese a que tal como se consignó en la propia acta, éste habría sido la persona que contactó a la persona fallecida para que prestara servicios como su ayudante y quién se habría comprometido a pagarle los trabajos realizados.

Respecto a los hechos ocurridos el día del accidente, relata que el día viernes 13 de Octubre del año 2017, alrededor de las 9:30 AM, concurrió personal de la empresa Grúas Marzam, de razón social Marcos Simón Zambon Berlagosky, a la antigua planta de Curtidos Bas S.A., ubicada en Carlos Valdovinos N°129, comuna de San Joaquín, con quién se celebró un contrato para el servicio específico de mudanza, con todos los equipos necesarios para trasladar las últimas máquinas y equipos de la empresa a la nueva planta ubicada en la comuna de Maipú.

Menciona, que la planta ubicada en calle Carlos Valdovinos dejó de funcionar totalmente en el mes de Junio del año 2017, aun cuando los traslados de



trabajadores y maquinarias a la nueva planta ubicada en la comuna de Maipú, comenzaron a partir del mes de Enero del mismo año. De esta manera, indica que a partir del mes de Junio del año 2017, no existieron trabajadores que hayan continuado prestando servicios en la antigua planta, con excepción de un par de guardias destinados a labores de vigilancia, por lo que en la antigua planta, al momento del accidente, su parte no realizaba actividad productiva alguna.

El traslado de las maquinarias y equipos fue contratado a la empresa de transportes Grúas Marzam, la cual cumplía con todos los requisitos técnicos para realizar dicho servicio. El día del accidente también se encontraba al interior de las dependencias de la antigua planta, don Alfredo Sanhueza, con quién se celebró un contrato civil para la realización del servicio específico de pintura y soldadura de la máquina de secado al vacío, cuyo transporte realizaría ese mismo día la empresa de Grúas.

Explica, que según se informó con posterioridad, don Alfredo Sanhueza habría concurrido a la empresa el día del accidente, en compañía de la persona fallecida, quienes por su propia voluntad y sin constituir una obligación contractual, habrían concurrido a comprobar que los servidos realizados en la máquina no sufrieran daños al momento de la mudanza.

El traslado de las primeras partes del equipo al camión de transporte, se realizó en forma normal, sin contratiempos, mediante el empleo de la grúa pluma. Posteriormente, en el momento en que se estaba trasladando la tercera y última de las mesas que forma parte de la máquina, la persona que sufrió el accidente, de manera intempestiva, sin aviso ni instrucción alguna, se colgó de uno de los extremos de dicha mesa con el propósito de corregir la trayectoria de la carga del equipo, lo que provocó un desplazamiento de la pieza, haciéndola girar al punto de golpear un poste, lo que provocó que se desarmara una de las cadenas que formaba parte del sistema de amarre de la mesa al gancho de la grúa pluma, cayendo la pieza sobre la persona fallecida.

3.- Inexistencia de relación laboral con la persona fallecida ni existencia de trabajo en régimen de subcontratación.

Insiste, en que tanto el acta de inspección, la sentencia impugnada y la resolución N° 7791, consignan una serie de supuestas deficiencias cometidas en materia de "higiene y seguridad", propias de la legislación laboral y de seguridad social, las que se encuentran establecidas en relación con trabajadores que prestan sus servicios en el marco de una relación laboral, sea únicamente con su empleador directo o en un sistema de trabajo en régimen de subcontratación.



Adicionalmente, la propia competencia de la Seremi de Salud para investigar este tipo de accidentes, requiere como fundamento fáctico que el accidente haya ocurrido en el marco de una relación laboral.

De esta manera, si no existió relación laboral, no son aplicables las normas de higiene y seguridad contenidas en la legislación laboral y de seguridad social, entre otras, en el Código del Trabajo, la Ley 16.744 y los Decretos N° 40 y 574, como tampoco la Seremi tendría competencia para la investigación y sanción de accidentes no laborales.

Advierte que tanto el sumario sanitario como la sentencia dictada en él, contienen un evidente error, cual es citar a formular descargos y condenar a su representada, no obstante que entre ella y la persona fallecida no existió relación de tipo laboral, ya sea de forma directa como empleador directo o en régimen de subcontratación, en calidad de empresa principal o mandante.

Tampoco existió, en consecuencia, relación de subcontratación de la reclamante ni con Alfredo Sanhueza ni con la empresa de Grúas Marzan, respecto de las cuales se celebraron contratos civiles para la prestación de servicios específicos y esporádicos, que no son propios del giro de su empresa, por lo que no cumplen con los requisitos establecidos en los Artículos 183 A y siguientes del Código del Trabajo para la existencia de trabajo en régimen de subcontratación. Explica que, lo que hubo entre su parte y el Sr. Sanhueza y Grúas Marzan fue un contrato de provisión civil o comercial de servicios.

Insiste, en que la resolución impugnada, no señaló el tipo de responsabilidad o participación que se le atribuye a su parte, en las deficiencias constatadas a la empresa de Grúas Marzan, debiendo en cualquier caso, entenderse que dicha responsabilidad no es directa como empleador de la persona fallecida, sino que, aparentemente por una figura de supuesto trabajo en régimen de subcontratación, donde su representada, habría tenido la calidad de dueña de la obra o faena donde prestaba sus servicios la persona fallecida. Lo mismo ocurriría respecto de la otra empresa sumariada.

Y en este aspecto, señala que se advertiría un nuevo error del sumario, cual es citar a presentar descargos y condenar a 2 empresas cuya responsabilidad se extendería aparentemente por la supuesta existencia de trabajo en régimen de subcontratación, y no citar, formular cargos ni condenar a la persona que, según lo indicado en la propia acta, habría tenido la calidad del empleador directo de la persona fallecida, que en este caso corresponde a don Alfredo Sanhueza, quién contactó a la persona fallecida para que lo ayudara a realizar los servicios y quién se habría comprometido a pagarle los trabajos realizados. De esta manera, mal



se podría imputar responsabilidad a la supuesta empresa principal, si no se imputó previamente responsabilidad al supuesto empleador directo, quién es el principal responsable en asegurar la salud de sus trabajadores.

Cita al respecto, el artículo 183-A del Código del Trabajo y los artículos 1 y 4 del Decreto N° 76.

Expone que de lo dispuesto en las normas legales citadas previamente, fluye que los requisitos copulativos para que exista trabajo en régimen de subcontratación son los siguientes:

- I. Que el dependiente labore para un empleador, denominado contratista o subcontratista, en virtud de un contrato de trabajo.
- II. Que la empresa principal sea la dueña de la obra, empresa o faena en que se desarrollen los servicios o se ejecuten las obras objeto de la subcontratación.
- III. Que exista un acuerdo contractual entre el contratista y la empresa principal dueña de la obra o faena, conforme al cual aquél se obliga a ejecutar, por su cuenta y riesgo, obras o servicios para esta última;
- IV. Que las señaladas obras o servicios sean ejecutadas por el contratista con trabajadores de su dependencia.
- V. Que los servicios prestados por el contratista a la empresa principal no sean discontinuos o esporádicos, sino por el contrario, continuos y habituales.
- VI. Que los servicios desarrollados por los trabajadores de la contratista sean propios del giro de la empresa principal, y que su ejecución se realice bajo su responsabilidad, en un área o lugar determinada, con trabajadores sujetos a régimen de subcontratación.

Advierte que en el presente caso no se cumplen al menos con los requisitos establecidos en los N° I, II, IV, V y VI anteriores. Ello, por cuanto: i) entre la persona fallecida y don Alfredo Sanhueza no existió una relación de naturaleza laboral; ii) Los servicios contratados eran específicos realizados de manera esporádica; III) Los servicios contratados no forman parte del giro de la empresa principal, ni su ejecución se realizó bajo su responsabilidad.

La inexistencia de relación laboral o de subcontratación, fue constatada por todos los organismos que efectuaron una investigación de los hechos ocurridos, todos documentos que fueron oportunamente incorporados en el sumario sanitario, y que no fueron considerados al momento de dictar la sentencia.

Así, expone que el informe de fiscalización, emanado de la Inspección Comunal del Trabajo de Maipú, de fecha 31 de Octubre de 2017, acompañado en el sumario sanitario, consigna como conclusión en su letra c): *“En atención a los hechos constatados y el mérito de los antecedentes documentales tenidos a la*



vista, la entrevista al representante del empleador, no se pudo determinar infracción, razón por la cual se finaliza la presente fiscalización sin multa administrativa".

Agrega, que en forma previa, en relación con los "hechos constatados en relación a las materias fiscalizadas" el mismo informe consigna: "De la misma forma, se le entrega al suscrito copia de boleta de prestación de servicios de terceros emitida por la empresa Curtidos Bas, fechada el 11 de Octubre de 2017, N° 00486. Además de copia de 2 cheques emitidos a nombre del Sr. Sanhueza, los que en su conjunto enteran el monto pactado y detallado en la misma".

Por otra parte, el informe de la investigación del accidente realizado por la ACHS, también acompañado en el sumario sanitario, en su N° 4 sobre la descripción del accidente, señala: "Resumiendo de acuerdo a estos antecedentes recopilados y analizados, podemos indicar que la persona que resultó afectada fue el Sr. Cristián Urzúa, ayudante del Sr. Alfredo Sanhueza, que había sido contratado bajo la figura de prestación de servicios a honorarios para pintar el equipo"; "De acuerdo a los antecedentes antes descritos y la situación que se expone, relativa a la eventual aplicación del régimen que regula la subcontratación laboral, cabe hacer presente que la Asociación Chilena de Seguridad, en su calidad de organismo Administrador del Seguro Social de la ley N° 16.744, carece de competencia para emitir un pronunciamiento respecto de la procedencia de dar aplicación, en un caso concreto, a la normativa que regula el trabajo en régimen de subcontratación. Lo anterior, toda vez que la competencia al respecto se encuentra radicada en la Dirección del Trabajo".

Finalmente, señala, el informe elaborado por el Comité Paritario de Orden, Higiene y Seguridad vigente en la empresa, integrado por representantes del empleador y de los trabajadores, de fecha 31 de Octubre del 2017, también acompañado en el sumario sanitario, en su parte pertinente menciona: "Conforme a lo expuesto anteriormente y de los demás antecedentes recabados por este Comité, se concluye que no procede investigar las causas del accidente, por no tratarse de un accidente del trabajo que haya involucrado a trabajadores de la empresa, ni a trabajadores de empresas contratistas de ésta."

Agrega, que su parte acompañó en el sumario sanitario, la siguiente documentación que descartaba la existencia de relación laboral o de subcontratación entre las partes:

- Copia declaración presentada ante la Seremi por don Alfredo Sanhueza.
- Copia de la boleta de honorarios N° 00486, correspondiente a los servicios prestados por don Alfredo Sanhueza y copia de cheque pagado a dicha persona.



- Copia del informe de accidente preparado por su representada.
- Copia de contrato de prestación de servicios suscrito entre su representada y la empresa Marcos Simón Zambón Berlagosky, de fecha 20 de Octubre de 2016.
- Copia de 2 facturas emitidas por Marcos Simón Zambón Berlagosky a la reclamante, con comprobante de pago.
- Copia de presupuesto presentado a su representada por don Alfredo Sanhueza, de fecha 22 de Agosto de 2017.
- Copia de declaraciones juradas ante notario de las siguientes personas: Ramón Ernesto Valenzuela Catalán, RUT N° 7.435.853-5; Fernando Wladimir Aguayo Moraga, RUT N° 6.498.094-7 y Robins Antonio Pérez León, RUT 9.645.492-9.
- Copia de información tributaria de la reclamante, emanada del SII, en el que consta su giro.

Concluye, que en virtud de los fundamentos antes expuestos, los documentos acompañados en el sumario sanitario, y contrariamente a lo indicado en la Resolución Exenta impugnada, se debió concluir lo siguiente:

1. Entre la persona fallecida y la reclamante no existió relación laboral.
2. Entre la reclamante y la empresa Grúas Marzam no existió relación de subcontratación.
3. Entre la reclamante y don Alfredo Sanhueza no existió relación laboral ni relación de subcontratación.
4. Según lo señalado en el acta, quien contrató los servicios civiles de la persona fallecida habría sido don Alfredo Sanhueza, respecto de quién el acta, el sumario y la sentencia impugnada no formuló cargos.
5. En mérito de lo anterior y contrariamente a lo indicado en la sentencia impugnada y la resolución N° 7791, no son aplicables en este caso las normas de higiene y seguridad establecidas en la legislación laboral, ni el Seremi de salud tiene competencia para iniciar un sumario sanitario en contra de su representada producto del accidente sufrido por don Cristián Urzúa.

Por el contrario, advierte que la sentencia impugnada no hace mención a los documentos acompañados por su parte en el sumario sanitario, no se refiere a ellos, ni explica los motivos por los cuales no fueron considerados al momento de resolver el sumario, pese a que el análisis de los mismos, permite eximir de responsabilidad a su representada. Por el contrario, se habría limitado a repetir las supuestas infracciones constadas en el acta de fiscalización.



Insiste en que, sin perjuicio de los argumentos ya expuestos, tampoco son imputables a su representada las supuestas deficiencias indicadas en el acta ni en la sentencia, según expone a continuación:

1. Empresa Zambón Berlagosky no contaba al momento de accidente con registro de verificación de las condiciones de estados operativos de eslingas, estrobos, grilletes, antes de iniciar los trabajos de izaje de la carga.

Explica que se trataría de una deficiencia que se imputó expresamente a la empresa Zambón Berlagosky y no a su representada, no existiendo responsabilidad de mi parte al no existir trabajo en régimen de subcontratación con dicha empresa.

2. Falta de control por parte de ambas empresas al momento de accidente, no considerando los factores de riesgo asociados a la intervención de terceros en perímetro de seguridad asociados a la maniobra de izaje de cargas superiores a 20 toneladas.

Advierte que se trataría de la única imputación de responsabilidad efectuada a su representada, la cual no es aplicable en razón de la no existencia de relación laboral, ni de trabajo en régimen de subcontratación. Adicionalmente, la imputación, añade que la imputación sería equivocada, por cuanto se refiere a la falta de control de los riesgos asociados a la intervención de terceros en perímetro de seguridad asociados a la maniobra de izaje de cargas superiores a 20 toneladas, no obstante que en ningún caso el izaje de la mesa que provocó el accidente corresponde a dicho peso, tratándose de grúas plumas que en ningún caso realizan cargas superiores a 7 toneladas. De esta manera, y al existir un evidente error en la imputación de responsabilidad que se realiza, ésta deberá ser rechazada.

3. No existía al momento del accidente permisos de trabajo asociados a tareas críticas de izaje de carga.

Refiere que esta se trata de una exigencia que corresponde sólo a la empresa de Grúas, sin que corresponda exigir a su representada la obtención de permisos de trabajo asociados a tareas críticas de izaje de carga. Lo anterior se confirmaría con el hecho que la Seremi no solicitó a su representada la exhibición de dicho documento y añade que al no existir relación de subcontratación, su parte no es responsable por supuestas deficiencias constadas a la empresa de Grúas.

4. No existía al momento del accidente, previo a realizar los trabajos de izaje, análisis seguro de los trabajos (AST), identificando peligros y evaluando los riesgos de la actividad, considerando factores externos.

Sobre esto, indica que se remite a lo expresado en el punto N° 3



5. No existía al momento del accidente registro de capacitación de procedimiento de izaje de cargas a los trabajadores que realizaban dicha actividad.

Sobre esto, indica que se remite a lo expresado en el punto N° 3

6. Matriz de identificación de peligros y evaluación de los riesgos de la empresa Zambón Berlagosky no consideraba en las maniobras de izaje de materiales los peligros y riesgos inherentes a dicha actividad.

Señala que se trata de una supuesta deficiencia que se imputó expresamente a la empresa Zambón Berlagosky y no a su representada, no existiendo responsabilidad de su parte al no existir trabajo en régimen de subcontratación con dicha empresa.

7. No se presenta registro de mantención periódica del equipo grúa pluma, en específico gancho de elevación y su respectiva memoria de resistencia de la empresa Zambón Berlagosky.

Señala que se trata de una supuesta deficiencia que se imputó expresamente a la empresa Zambón Berlagosky y no a su representada, no existiendo responsabilidad de su parte al no existir trabajo en régimen de subcontratación con dicha empresa.

8. Falta de evaluación y planificación en el traslado de mesa metálica, no considerando factores de inclinación y desestabilización producto de la metodología de amarre de eslingas a estructuras y factores externos.

Sobre esto, indica que se remite a lo expresado en el punto N° 3

9. Procedimiento de trabajo seguro para maniobras de izaje no considera delimitación y segregación de la zona de seguridad, de manera de advertir a los trabajadores los trabajos críticos y peligros del lugar.

Sobre esto, indica que se remite a lo expresado en el punto N° 3.

10. No presenta la empresa Zambón Berlagosky programa de mantención de equipos de grúa pluma.

Señala que se trata de una supuesta deficiencia que se imputó expresamente a la empresa Zambón Berlagosky y no a su representada, no existiendo responsabilidad de su parte al no existir trabajo en régimen de subcontratación con dicha empresa.

11. Falta de supervisión directa en maniobras de izaje de cargas con el fin de controlar los factores de riesgo internos y externos.

Sobre esto, indica que se remite a lo expresado en el punto N° 3

A continuación y adicionalmente a las defensas expuestas, indica que la sentencia impugnada y la resolución N° 7791, no cumplieron con el requisito y exigencia de



todo acto administrativo, consistente en resolver y emitir pronunciamiento respecto de todas las defensas y peticiones efectuadas por los particulares. En este sentido la sentencia no emitió pronunciamiento respecto de la defensa expuesta en el número 1 del escrito de descargos presentado por su parte, por el cual se señalan la existencia de una serie de deficiencias contenidas en el acta levantada por la funcionaria de la Seremi de Salud, respecto de las cuales, la sentencia, ratificada por la resolución N°7791, se limitó en su parte resolutive a "basta para dar por establecida la existencia de la infracción a las leyes y reglamentos sanitarios el acta que levante el funcionario del servicio al comprobarla", lo que en ningún caso podría considerarse como una resolución a la defensa opuesta.

Producto de no haberse emitido pronunciamiento respecto de la defensa expuesta por su parte, reitera la defensa de que el acta levantada por la funcionaria de la Seremi no se ajusta a la normativa vigente, como tampoco al manual de fiscalización emanado del Ministerio de Salud, motivo adicional por el cual su representada debe ser exonerada del sumario sanitario.

Cita los artículos 161 y 163 del Código Sanitario y señala que de las normas transcritas, se advierte que el sumario sanitario puede iniciarse de oficio o por denuncia efectuada por particulares, teniendo por propósito en ambos casos la investigación de infracciones a la normativa sanitaria, y que en el caso de que el sumario se inicie de oficio, se debe levantar un acta que contenga la supuestas infracciones que serán objeto de investigación en el sumario sanitario.

Lo anterior se confirma con lo dispuesto en el "manual de fiscalización", emanado del Ministerio de Salud, en el cual se establece, a propósito del "levantamiento y contenido del acta de inspección", que *"el acta deberá levantarse con copia, en el lugar en que se practica la diligencia de inspección, empleando una letra clara y legible. En ella deberá dejarse constancia de lo siguiente:...c) Hechos que constituyen la eventual infracción a la normativa sanitaria presuntamente infringida y alusión a esta, con su respectiva denominación si fuere posible. El acta evitará cualquier de valor sobre los hechos, además de toda apreciación subjetiva de las circunstancias que rodean los hechos los cuales serán señalados en la forma como fueron percibidos por los sentidos o los medios instrumentales que permitan su percepción."*

Hace presente, que el acta que levanta el funcionario del Seremi de Salud constituye un instrumento público, y que su contenido fija los hechos que deberán ser investigados y ponderados en el sumario sanitario, del tal modo que si la referida acta no cumple con los requisitos legales impide el inicio y desarrollo del sumario.



Afirma que el acta levantada en el presente caso no cumplió con los requisitos legales, como tampoco con el manual de procedimiento establecido por el Ministerio de Salud, por cuanto de su simple lectura se advierte que en ella no se hizo alusión a la o las eventuales normas sanitarias presuntamente infringidas, impidiendo que su representada tome cabal conocimiento de las infracciones legales que se le imputan, las cuales sólo podría presumir.

Señala que el hecho que su representada haya formulado descargos en el sumario sanitario, presentando una serie de documentos como medio de prueba, no significa que las eventuales ilegalidades del acta no le hayan causado perjuicio, por cuanto el hecho de no conocer con exactitud las supuestas normas sanitarias infringidas que se le imputan afectan el derecho de defensa, el cual exige conocer con precisión los cargos que se formulan. En este sentido el sumario sanitario debe conocer infracciones a la legislación sanitaria y no *“deficiencias en materia de higiene y seguridad”*, las que no necesariamente constituyen una infracción a la normativa sanitaria.

Agrega por otra parte, y en relación con las supuestas deficiencias constatadas en el acta, en varias de ellas tampoco se estableció la forma cómo dichas deficiencias fueron percibidas por los sentidos del fiscalizador o los medios instrumentales que permitan su percepción, tal como lo ordena el manual de fiscalización, lo que también le resta valor al acta.

A continuación, respecto a la Resolución Exenta N° 7791 que resolvió el recurso de reposición interpuesto por la reclamante, rebajando la multa aplica a 200 UTM, indica que la resolución antes indicada en lo fundamental señala lo siguiente: *“que los antecedentes aportados en el caso logran tener la entidad suficiente, para morigerar su responsabilidad, en el caso de marras. No obstante anterior, la sumariada deberá tener presente que, los lugares de trabajo deberán mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza y así también deben tener presente que deberá suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores, por consiguiente y en virtud de los antecedentes analizados en el presente Sumario Sanitario y de sus alegaciones, ésta Autoridad procederá a modificar la sanción aplicada, tal como se dispondrá en lo resolutivo de este instrumento.*

Que respecto de la vulneración del principio de proporcionalidad en la fijación de la multa aplicada por el instrumento que se recurre, la sumariada debe tener presente que de acuerdo a la legislación sanitaria, esta Autoridad Sanitaria está facultada para imponer multas desde un décimo a mil unidades tributarias



mensuales, siendo facultad privativa del juez sanitario la evaluación de los antecedentes, pudiendo recorrer en toda su extensión el quantum sancionatorio, donde la ponderación de los antecedentes existentes en el expediente de marras permitió fijar la multa en el parámetro establecido en el instrumento que se recurre"

Explica, que la citada resolución, ratifica en todas sus parte la sentencia impugnada y sus fundamentos, con la sola excepción de rebajar la multa a 200 UTM, motivo por el cual adolece de los mismos errores y defectos que se contienen en la sentencia, además de no indicar cuales serían los antecedentes aportados por su parte que permitirían sólo rebajar el monto de la multa y no dejarla sin efecto, tal como fue solicitado en el recurso de reposición.

Concluye, que tanto la resolución N° 7791 como la sentencia dictada en el sumario sanitario, no se refieren ni resolvieron la contienda jurídica promovida en este caso, consistente en que al no existir relación laboral entre su representada y el trabajador fallecido, como tampoco relación de subcontratación entre su representada y la otra empresa sumariada o la persona que contrató los servicios de la persona fallecida, no son aplicables en este caso y respecto de su parte las normas de higiene y seguridad contenidas en la legislación laboral y de seguridad social, entre otras, en el Código del Trabajo, la ley 16.744 y los Decretos N° 40 y 574, como tampoco la Seremi tiene competencia para la investigación y sanción de accidentes no laborales.

En subsidio de las alegaciones expuestas y en el evento que se estime que su representada sí tuvo responsabilidad en el accidente sufrido por el trabajador, alega lo siguiente:

Expone que si bien es cierto que la multa aplicada se encuentra dentro del rango un décimo de UTM hasta 1000 UTM, establecido en el artículo 174 del Código Sanitario, la resolución impugnada omitió emitir pronunciamiento respecto de los fundamentos o circunstancias que se tomaron en consideración al momento de imponer una multa de 200 UTM. Lo anterior, infringiría el principio de que los actos administrativos deben encontrarse debidamente fundados y motivados, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada y por lo segundo, que exprese los razonamientos lógico- jurídicos sobre el por qué consideró que el caso concreto debía aplicarse una multa de dicha cuantía.



Asimismo, alega en subsidio de las defensas anteriores y teniendo en consideración que de las 11 deficiencias constatadas en el acta, sólo una se refiere a una deficiencia que se constató respecto de su representada, y que por el contrario las 11 deficiencias fueron constatadas íntegramente respecto de la otra empresa sumariada, correspondería rebajar el monto de la multa en forma proporcional a las deficiencias constadas, o en subsidio rebajar la multa al mismo valor establecido para la otra empresa, en caso que a esta última también se le haya rebajado el monto de la multa.

Por último, señala que conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del Código Sanitario, en el caso de autos no concurre ninguna de las circunstancias ahí indicadas, por lo que procede acoger la reclamación deducida, siendo del todo procedente; además, agrega que esta se interpuso dentro del plazo de 5 hábiles contados desde la fecha de notificación de la resolución que resolvió el recurso de reposición presentado por su parte, ante la autoridad sanitaria.

Solicita en definitiva, acoger la reclamación deducida, dejando sin efecto la multa de 200 UTM que la referida sentencia aplicó a su representada, por los motivos indicados en esta presentación, o en subsidio, rebajar la cuantía de la multa a la cantidad que se estime en derecho, con costas.

SEGUNDO. Que, la reclamada contestó la demanda, solicitando su total rechazo, con costas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho que expone:

Preliminarmente, señala su parte controvierte la versión de los hechos en que se funda la reclamación, salvo los que se reconozcan expresamente en la presente contestación.

A continuación y en cuanto a los antecedentes, relata que según consta en Acta de inspección de fs. 1,2,3 y 4 del sumario sanitario, de fecha 28 de diciembre de 2017, un funcionario fiscalizador del Subdepartamento de Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos de la Seremi de Salud, se constituyó en visita inspectiva en obra en construcción, ubicada en Avenida Carlos Valdovinos N° 129, comuna de San Joaquín, de propiedad de Curtidos Bas S.A., en atención al accidente fatal que afectó al trabajador Cristian Gabriel Urzúa, contratado a honorarios por el señor Alfredo Sanhueza, quien es el que genera boleta de prestación de servicios con la empresa Curtidos Bas S.A., realizando ambos trabajos de pintura y soldadora en la instalación, y quien le pagaba los servicios al trabajador fallecido.



El hecho ocurre el día 13 de octubre de 2017 a las 12:30 horas aproximadamente, cuando la grúa pluma perteneciente a la empresa Marcos Ramón Berlagosky, realizaba trabajos de izaje de carga (mesa metálica) de la máquina de secado al vacío marca "Baggio" desde el galpón de acondicionado hacia pasillo externo mediante el uso de eslingas planas y cadenas, en momentos en que circula la grúa marcha atrás. El trabajador de improviso se cuelga de una esquina de la mesa metálica, lo cual provoca que esta se desestabilice y se desprenda de uno de los lados de la mesa la eslinga, cayendo sobre el trabajador, aplastando su cuerpo, provocando su muerte en el lugar. Cabe señalar que la mesa pesa 2.5 toneladas aproximadamente.

Señala que en la visita inspectiva, se constataron las siguientes deficiencias en materia de Higiene y Seguridad:

1. Empresa Zambon Berlagosky no contaba con registro de verificación de las condiciones y estados operativos de eslingas, estrobos y grilletes antes de la iniciación de los trabajos de izaje de carga.
2. Falta de control por parte de ambas empresas al momento del accidente, no considerando los factores de riesgo asociados a la intervención de terceros en perímetro de seguridad asociado a la maniobra de izaje de cargas superiores a 2.0 toneladas.
3. No existía al momento del accidente permisos de trabajo asociados a las tareas críticas de izaje de carga.
4. No existía al momento del accidente, análisis seguro de los trabajos que se realizara con antelación a la ejecución de estos, identificando peligros y evaluando los riesgos de la actividad, considerando factores externos.
5. No existía al momento del accidente un registro de capacitación del procedimiento de izaje de cargas a los trabajadores que realizaban dicha actividad.
6. Matriz de identificación de peligros y evaluación de los riesgos de la empresa Zambon Berlagosky no consideraba en las maniobras de izaje de materiales los peligros y riesgos inherentes de la actividad.
7. No se presenta registro de mantención periódica del equipo grúa pluma, en específico gancho de elevación y su respectiva memoria de resistencia de la empresa Zambon Berlagosky.
8. Falta de Evaluación y planificación en el traslado de mesa metálica, no considerando factores de inclinación y desestabilización producto de la metodología de amarre de eslinga a la estructura y factores externos.



9. Procedimiento de trabajo seguro para maniobras de izaje no considera delimitación y/o segregación de la zona de seguridad de manera de advertir los trabajos críticos y peligrosos del lugar.

10. La empresa Zambon Berlagosky, no presenta programa de mantención de equipo grúa pluma.

11. Falta de supervisión directa en la maniobra de izaje de cargas con el fin de controlar los factores de riesgos internos y externos.

Menciona que la Autoridad sanitaria citó al legal representante de la empresa Curtidos Bas S.A. al departamento Jurídico de dicha Secretaría de Salud, para el día 10 de enero de 2018, a las 12:00 horas, para presentar los correspondientes descargos, lo que efectuó en dicha fecha según consta en el sumario sanitario.

Con fecha 7 de agosto de 2018 se dictó la Sentencia N° 005356 en el Sumario Sanitario, y con el fundamento de que de los antecedentes del Sumario queda establecido que las sumariadas han infringido los artículos 3, 36 y 37 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, aprobados por D.S. 594/99 del Ministerio de Salud, se aplicó a Curtidos Bas S.A. una multa de 300 U.T.M. y a la empresa Marcos Simón Zambon Berlagosky, una multa de 200 U.T.M.

Contra dicha sentencia la reclamante interpuso recurso de reposición, dictándose la Resolución N° 007791 de 16 de noviembre de 2018, por la que considerando que existen antecedentes que morigeran la responsabilidad de la reclamante, la Autoridad Sanitaria rebajó la multa impuesta a Curtidos Bas S.A. de 300 U.T.M. a 200 U.T.M.

Con fecha 29 de noviembre de 2018 se notificó la referida resolución a la empresa reclamante, la que con fecha 5 de diciembre de 2018 interpuso la reclamación deducida en estos autos por la cual se solicita que se deje sin efecto la sanción impuesta en el sumario sanitario o que en susidio esta sea rebajada, en base a lo expuesto en su demanda.

En cuanto a las defensas y alegaciones deducidas, señala en primer lugar, la improcedencia de la reclamación deducida, explicando que la reclamante mantiene una errada aplicación del derecho cuando sostiene que la Seremi de Salud no tiene competencia para la investigación y sanción impuesta, dado que en el caso de autos, se trataría del ejercicio de facultades fiscalizadoras y sancionatorias conferidas al Seremi de Salud en aplicación de un Reglamento Sanitario.



Afirma, que el Seremi de Salud no ha hecho más que actuar en el campo que le corresponde, es decir, el “*Sanitario*”, cuestión a la que por lo demás, está obligado legal y constitucionalmente a cumplir.

Indica al respecto que el Código Sanitario, corresponde precisamente al cuerpo legal de donde emanan las facultades que constitucional y legalmente ha ejercido en este caso, el Servicio de Salud (hoy Seremi de Salud) recurrido en estos autos. Y el artículo 1° del Código Sanitario, establece claramente cuál es el objeto de sus normas:

“El fomento, protección y recuperación de la salud de los habitantes de la República.”

Señala como relevante, que las materias sanitarias, vale decir, aquellas vinculadas con la “salud” de las personas, son técnicamente identificadas y determinadas a partir del concepto de “salud” universalmente aceptado, esto es, aquél que la Organización Mundial de la Salud, ha definido en los siguientes términos: *“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.”*

Refiere a continuación, que el artículo 2° del Código Sanitario entrega al Presidente de la República, la facultad de dictar las normas para la aplicación de las disposiciones contenidas en éste. Añade, que el artículo 3° del Código Sanitario, entrega a la Autoridad Sanitaria, hoy Seremi de Salud, la obligación de atender todas las materias relacionadas con la salud pública y el bienestar higiénico del país conforme con lo dispuesto en el inciso final del N° 14 del artículo 10 de la Constitución Política del Estado (hoy artículo 19 N° 8 y 9 de la actual Constitución).

Por su parte, señala que el artículo 9° letra a) del Código Sanitario entrega a la Autoridad Sanitaria la obligación de velar por el cumplimiento de las disposiciones del Código Sanitario y de los reglamentos, resoluciones e instrucciones que lo complementen, y sancionar a los infractores.

A continuación, agrega, el Libro X del Código Sanitario, relativo a los “Procedimientos y Sanciones”, en su Título I trata de la “Inspección y Allanamiento”; luego, en su Título II trata del “Sumario Sanitario”; y en el Título III, de las “Sanciones y Medidas Sanitarias”.

En consecuencia, atendida la condición de vigencia del cuerpo legal recién citado (Código Sanitario), resultaría evidente e incuestionable, la facultad constitucional y legal de su representada, para conocer, fiscalizar y sancionar, conforme a la normativa sanitaria que debe aplicar en cumplimiento de sus obligaciones funcionarias.



Expone que en el caso de autos, la reclamada fue sancionada por actuaciones suyas que implicaron una infracción a los artículos 3, 36 y 37 del Decreto Supremo N° 594 del año 1999 del Ministerio de Salud, instrumento normativo dictado conforme a la potestad reglamentaria del Presidente de la República y cuyo carácter sanitario es manifiesto, tanto por el contenido de sus disposiciones, como por el evidente hecho de corresponder al Ministerio de Salud.

Señala que a lo largo de toda la reclamación y en contravención a la ley, la actora intenta cuestionar las razones por las que la SEREMI impuso en su contra la multa de 200 UTM, lo que es improcedente y debe rechazarse, toda vez que tal como se constata de los antecedentes de la causa, cada una de las infracciones denunciadas en su contra, efectivamente se cometieron del modo que se denuncia por los funcionarios fiscalizadores, quiénes se constituyeron en el lugar de los hechos.

Analizando los hechos constitutivos de las infracciones y sanción aplicada, hace presente que la reclamante no ha desvirtuado su responsabilidad en los referidos hechos ya que:

- 1.- El Seremi de Salud actuó dentro de sus atribuciones legales al incoar y fallar un sumario sanitario; y
- 2.- Que el Seremi de Salud aplicó una sanción en virtud de la existencia de una infracción a un Reglamento Vigente (el D.S. 594/1999 del Ministerio de Salud) específicamente los artículos 3°, 36 y 37 del Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

El artículo 171 del Código Sanitario, ubicado dentro del Libro X, Título II, constituye una vía especial de reclamación y está establecida exclusivamente como un medio para dejar sin efecto sentencias sanitarias que aplican sanciones, las cuales, a su vez, son el resultado de un proceso público contradictorio en el cual se otorga audiencia a la parte sancionada, el que conocemos como Sumario Sanitario.

Al respecto, el artículo 170 del Código Sanitario señala que: *“La clausura y demás medidas sanitarias ordenadas en la sentencia no podrán dejarse sin efecto o suspenderse a menos que el Director General de Salud así lo ordenare, o que lo dispusiera la justicia ordinaria al fallar por sentencia definitiva ejecutoriada o que cause ejecutoria, la reclamación que se interponga.”*

A su vez, el artículo 171 del mismo Código antes mencionado, dispone: *“De las sanciones aplicadas por el Servicio Nacional de Salud podrá reclamarse ante la justicia ordinaria civil, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, reclamo que tramitará en forma breve y sumaria”.*



“El tribunal desechará la reclamación si los hechos que hayan motivado la sanción se encuentren comprobados en el sumario sanitario de acuerdo con las normas del presente Código, si tales hechos constituyen efectivamente una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios y si la sanción aplicada es la que corresponde a la infracción cometida”.

Por su parte, el artículo 172 del mismo cuerpo legal, preceptúa que *“las sentencias que dicte la autoridad sanitaria podrán cumplirse no obstante encontrarse pendiente la reclamación a que se refiere el artículo anterior, sin perjuicio de lo que por sentencia definitiva ejecutoriada o que cause ejecutoria resuelva la justicia ordinaria al pronunciarse sobre aquélla”.*

Advierte que tomando en cuenta todo lo expuesto, y aplicándolo a los precisos términos del artículo 171 del Código Sanitario, aparece como suficiente para efectos de desechar la presente reclamación, en atención a lo siguiente:

1.- Los hechos sancionados sí se encuentran debidamente comprobados en el sumario sanitario.

Destaca que las actas de inspección que originaron el sumario sanitario fueron levantadas por funcionarios del SEREMI de Salud de la Región Metropolitana quienes, en virtud del artículo 166 del Código Sanitario tienen el carácter de Ministros de Fe, pues su testimonio es suficiente para dar por establecida la existencia de la infracción, constituyendo entonces plena prueba de lo cual fluye que los hechos consignados en el acta de inspección no requieren de otras pruebas.

Además, dicha facultad, ha sido ejercida por la autoridad sanitaria de manera exhaustiva, y por tanto apta para formar convencimiento en el inspector, respecto de los hechos que en ella consigna, sin que sea necesario, como pretende la contraria, que los funcionarios fiscalizadores consignen en el Acta de Infracción las normas sanitarias aplicables a las infracciones cometidas, ya que de acuerdo con las normas señaladas anteriormente de lo que debe dejarse constancia por los fiscalizadores, son los hechos que constituyen una eventual infracción a la normativa sanitaria, y no la apreciación de los mismos ni su calificación jurídica, función que le corresponde al Seremi de Salud al dictar la sentencia en el sumario Sanitario.

Luego, concluye que los hechos consignados en el acta de inspección se encuentran completamente comprobados en el sumario sanitario del modo en que el Código Sanitario establece en sus artículos 156 y 166, y por lo demás la sentencia dictada en el sumario sanitario se encuentra perfectamente fundada.



Prueba de lo anterior, sería que la reclamante no discute ni controvierte los referidos hechos, limitándose a controvertir su responsabilidad infraccional.

2.- Los hechos que motivaron la sanción efectivamente infringen un reglamento:

Como señala la resolución recurrida, respecto de la obligación de la demandante referente al cuidado de los trabajadores que realicen faenas en sus instalaciones, el artículo 3 del D.S. N° 594 de 1999 establece que: *“la empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, sean estos dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella”*.

Por lo tanto, la normativa vigente al establecer el deber del empleador de velar por la salud y seguridad de los trabajadores no distingue la dependencia de estos, como equivocadamente concluye el demandante, sino que considera la circunstancia que sean trabajadores que se desempeñan en el lugar de trabajo propiedad de la empresa, lo que ocurre en el caso de autos, en el que además, como reconoce la propia reclamante existió un acuerdo contractual entre la empresa contratante del trabajador fallecido, y la reclamante, para prestar servicios de pintura y soldadura en las instalaciones de la reclamante.

La conclusión anterior en nada se modifica y, es más, se confirma con el análisis de las normas que se mencionan por la demandante en relación con la obligación de seguridad y cuidado en el trabajo en régimen de subcontratación.

En efecto, indica que el tenor de lo dispuesto en el artículo 183 E del Código del Trabajo y del artículo 3 del mencionado Decreto Supremo N° 594, no excluyen ni eximen de responsabilidad al empleador directo del trabajador subcontratado, sino que amplían la obligación de seguridad y cuidado a la empresa principal respecto de todos los trabajadores que se desempeñan en la obra o faena, es decir, además de la obligación de cada contratista o subcontratista empleado, la dueña de la obra o faena también tiene obligación propia en esta materia, de la que no se encuentra exenta, toda vez que el trabajador fallecido, como se reconoce en la demanda, prestaba servicios de pintura y soldadura en la instalación de Curtidos Bas S.A. a través de su empleador Sr. Alfredo Sanhueza, quien se encontraba prestando dichos servicios en virtud de un acuerdo contractual.

Además, agrega que el artículo 36 del D.S. 594/99 dispone que: *“los elementos estructurales de la construcción de los locales de trabajo y todas las maquinarias, instalaciones, así como las herramientas y equipos, se mantendrán en condiciones seguras y en buen funcionamiento para evitar daño a las personas.”*



Así, a mayor abundamiento, señala que esta norma no solo se refiere a la salud y seguridad de los trabajadores, cualquiera sea su dependencia, sino que también respecto de la obligación de la protección de la salud y seguridad de todas las personas. De este modo la empresa reclamante se encontraba obligada a mantener las medidas de seguridad e higiene necesarias en su instalación para evitar daños a terceras personas, y no solo respecto a los trabajadores.

Por su parte, el artículo 37, inciso 1°, de dicho Reglamento, señala que: *“deberá suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud e integridad física de los trabajadores.”*

En consecuencia, los lugares de trabajo deben mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza y deberá suprimirse cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores, lo que la reclamante no hizo, según se desprende de los antecedentes del sumario sanitario.

Así, expone, las infracciones a los deberes de seguridad e higiene de la reclamante, se encontrarían claramente establecidos en los considerandos de la referida Sentencia N° 005356 de 7 de agosto de 2018, los cuales reproduce íntegramente en su presentación.

Concluye en consecuencia, que la reclamante es plenamente responsable de las infracciones establecidas en el sumario sanitario, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 3, 36 y 37 del DS 594/99 del Ministerio de Salud, que tiene especial aplicación en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 y 13 del Código Civil en relación con las normas de interpretación las leyes establecida en el artículo 19 y siguientes del mismo código.

3.- La sanción que fuera aplicada en el marco del sumario sanitario corresponde y es proporcional a la infracción cometida.

Refiere, que tal como ha sido señalado anteriormente, la Autoridad Sanitaria sí está facultada legalmente en virtud de lo dispuesto por el artículo 174 del Código Sanitario, para imponer multas entre un décimo de unidad tributaria mensual hasta mil unidades tributarias mensuales, entre otras sanciones de carácter sanitario.

En el caso que nos ocupa, el monto de la sanción por la cantidad de 200 UTM se ha fijado de manera muy prudencial y corresponde y está dentro de los límites establecidos por la ley. La ponderación de la gravedad de la infracción se efectúa aplicando criterios técnico-sanitarios, y además, considerando que la infracción de leyes y reglamentos sanitarios discutida en autos, tuvo como consecuencia un accidente laboral grave, como lo es la muerte de un trabajador. En tal sentido



reitera que se justificaría plenamente haber aplicado la multa que en estos autos se impugna, ya que esta está claramente permitida por la Ley, por lo que cabe rechazar que la misma tenga el carácter de arbitraria o que la resolución impugnada carezca de fundamento.

Por consiguiente, afirma que la presente reclamación debería ser desechada en todas sus partes, pues no existe vicio de legalidad que afecte ni al procedimiento ni a la sanción aplicados a la reclamada, que a contrario de lo que afirma la reclamante, se encuentra perfectamente fundada y ajustada al debido procedimiento legal y al mérito de las pruebas producidas sobre las infracciones reglamentarias cometidas, sin que la reclamante haya tenido ningún detrimento en su derecho a la defensa.

Concluye insistiendo en que la reclamación deducida en autos por la demandante, deberá ser desechada en todas sus partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Código Sanitario, pues no existe vicio de ilegalidad que afecte al procedimiento sancionatorio aplicado a la reclamada, encontrándose la sentencia dictada en el sumario sanitario en comento ajustada a los procedimientos previstos para sancionar infracciones reglamentarias como es el caso de autos y plenamente fundada.

Respecto a la solicitud de rebajar la multa impuesta al mínimo legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del Código Sanitario, la judicatura ordinaria únicamente puede dejar sin efecto o suspender la sanción, más de ninguna forma se admite modificarla o fijar una sanción distinta de la aplicada por la autoridad sanitaria, lo cual es de toda lógica en nuestro sistema jurídico, por cuanto no corresponde en ningún caso al juez ordinario, erigirse en administrador y con ello atropellar las competencias de ese poder del Estado.

Advierte que la parte reclamante, plantea peticiones que de forma alguna se enmarcan en las competencias que al efecto establece el Código Sanitario, por cuanto concretamente solicita que en subsidio se rebaje la multa impuesta, en circunstancias de que el tribunal carece de facultades para fijar una sanción distinta de la aplicada por la autoridad sanitaria.

En este marco, indica que menos podría el juez, tener competencia para modificar o más bien reducir la multa impuesta por la SEREMI de Salud Metropolitana por cuanto dicha atribución no le ha sido dada por ley, ni puede tampoco inferirse de una resolución que no viene en aplicar una multa, sino únicamente en resolver su reconsideración administrativa.



Asegura que resolver lo contrario, equivaldría a vulnerar lo dispuesto en el artículo 7° de la Constitución Política de la República que bajo sanción de nulidad, prohíbe a cualquier magistratura atribuirse otra autoridad o derechos –ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias- que aquellos expresamente por la Constitución o la ley conferidos, violentando además el principio de separación de poderes al mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos, contrariando el artículo 4° del Código Orgánico de Tribunales.

Reafirma lo planteado, citando una sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de fecha 10 de septiembre de 2018, Rol N° 34.595-2017, expediente caratulado "Empresa Constructora Sigro S.A con Fisco de Chile".

Solicita en definitiva, rechazar la reclamación deducida en todas sus partes, con expresa condena en costas.

TERCERO. Que para acreditar sus dichos, la reclamante acompañó en las siguientes probanzas:

Documental.

A folio 1, acompaña: a) Copia de la sentencia N° 005356 dictada por la Autoridad Sanitaria; b) Copia de Recurso de reposición presentado en contra de la resolución antes indicada; c) Copia de la sentencia N° 007791 dictada por la Autoridad Sanitaria; d) Copia del escrito de descargos formulado en el sumario sanitario; e) Escruta Pública en que consta la personería con la que se actúa en estos autos.

A folio 34, acompaña: a) Copia de declaraciones juradas emanadas de los Sres. Fernando Wladimir Aguayo Moraga, Rut N° 6.498.094-7, Presidente del Sindicato de Curtidos Bas S.A. de fecha 09 de Enero de 2018 y Robins Antonio Pérez León, Rut N° 9.645.492-9, mecánico de la empresa Curtidos Bas S.A., de fecha 09 de Enero de 2018; b) Copia de Resolución Exenta N° 5356, de fecha 07 de Agosto de 2018, correspondiente a sentencia dictada en Sumario Sanitario y copia de Resolución Exenta N° 7791, de fecha 16 de Noviembre de 2018, correspondiente a la resolución que resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la multa antes indicada, rebajando el valor de la multa a 200UTM; c) Copia de acta de visita de Inspección de la Seremi de Salud N° 0170101, a la empresa de grúas Zambon y copia de acta de visita de inspección del Seremi de Salud N°0165888, realizada en la propiedad ubicada en calle Carlos Valdovinos N° 129, San Joaquín; d) Copia informe de fiscalización realizado por la ICT de Maipú a la reclamante, N° 1737, año 2017 y copia de acta y carta de entrega del referido informe; e) Copia de Informe Técnico sobre investigación de accidente, Folio N°



1082335, realizado la por Asociación Chilena de Seguridad; f) Copia de acta de visita de Inspección de la Seremi de Salud N° 0165879, realizado a la reclamante; g) Copia de carta de fecha 23 de Octubre de 2017, dirigida al Seremi de Salud de la Región Metropolitana; h) Copia de acta de visita de Inspección de la Seremi de Salud N° 0162158, realizado a la reclamante y anexo N° 1 de acta de inspección; i) Copia de presupuesto presentado por don Alfredo Sanhueza a la reclamante, de fecha 22 de Agosto de 2017; copia acta de inspección Anexo entregado por funcionario de la Seremi de Salud al Sr. Sanhueza; copia de declaración jurada emitida por el Sr. Sanhueza de fecha 20 de Octubre de 2017; copia de boleta de prestación de servicios de terceros N° 00486 emitida por la reclamante, por servicios prestados por el Sr. Sanhueza y copia de cheques entregados al Sr. Sanhueza; j) Comprobante de pago de cotizaciones previsionales y planilla de trabajadores, correspondiente al pago de la cotización Asociación Chilena de Seguridad, realizado con fecha 12 de Octubre de 2017; k) Copia contrato de prestación de servicios suscrito entre Marcos Simón Zambon Berlagosky y Curtidos Bas S.A. de fecha 20 de Octubre de 2006; l) Declaración de accidente realizada por don José Miguel Bas Mayo de fecha 13 de Octubre de 2017; m) Declaración jurada emanada de don Ramón Ernesto Valenzuela Catalán, RUT N°7.435.853-5, de fecha 09 de Enero de 2018; n) Informe de investigación de accidente realizado por la empresa; o) Informe de investigación del accidente realizado por el Comité Paritario existente en la empresa reclamante.

Testimonial.

A folio 41, consta la rendición de la diligencia de prueba testimonial correspondiente a la parte reclamante, testigos que legalmente juramentados y sin tachas, declaran al tenor del auto de prueba dictado con fecha 03 de marzo de 2019.

Comparece don Alfredo Fernando Sanhueza Cuadra quien declara al tenor del punto de prueba número uno (1°.- Si es efectivo que la reclamante incurrió en una falta imputable en los hechos que derivaron en el accidente con resultado de muerte sufrido por don Cristian Gabriel Urzúa.) que no es efectivo, y añade que estaban con Cristian, solos trabajando en ese lugar, esto es la antigua planta donde se encontraba la máquina de vacío a reparar en calle Carlos Valdovinos, no recuerda el número, pero de Curtidos Bas. Había una empresa que estaba trasladando la máquina de vacío a otro lugar, y la función que cumplían con Cristian, era de recolectar las piezas pequeñas de la maquina señalada para que no se quedaran y preocuparnos de que no se rayara ésta. Durante el traslado de



una de las placas de la máquina de vacío que mide cada una 6 metros por 3 mts de año, uno de los bordes de la cita placa tocó el borde en una esquina de la construcción y eso produjo que la cita placa se desestabilizara y Cristian, el accidentado, iba detrás de la gente que iba realizando maniobra de traslado, y en un acto instintivo él saltó colgándose de la placa, cree que con la intención de estabilizarla, y esto generó que la placa se desestabilizara hacia el otro lado y se desenganchara de la Grúa, cayendo Cristian con el vuelo que llevaba, debajo de la placa, produciéndose el accidente fatal.

Repreguntado para que aclare el nombre de la maquina en el cual prestó servicios de mantención, y en qué consistieron estos servicios: responde que una máquina de vacío, y los servicios consistieron en la reparación de las tres placas que tiene la máquina, a través de parches de soldadura y pintura.

Repreguntado para que aclare, a qué se refiere cuando dice a la antigua planta; responde que era una planta que estaba vacía, lo único que había era la máquina a reparar y fierro.

Repreguntado para que aclare, qué persona o empresa estaba encargada del traslado de la máquina: responde que no recuerda el nombre de la empresa, pero que ellos venían con la grúa, personal y todo lo traían ellos.

Repreguntado para que aclare, qué relación tuvo él y la persona accidentada con la empresa Curtidos Bas, y como se le pagaron sus servicios: responde que la reparación de la máquina señalada. Agrega que se pagaron sus servicios a través de una boleta de honorarios. El dinero se lo pagó personalmente al accidentado. Cristián no tenía ninguna relación con la reclamante Curtidos Bas S.A.

Repreguntado para que aclare, quién contactó a la persona fallecida para que prestara los servicios: responde que el la contactó.

Repreguntado para que aclare, qué relación tenia con la persona fallecida y por qué lo contactó: responde que trabajaban juntos para un contratista, desmontando máquinas y reparándolas; los dos habían sido finiquitados, y en ese momento se encontraban sin trabajo y ahí apareció la posibilidad de reparar esta máquina de vacío y a raíz de los mismo, aprovecharon la oportunidad para tener unos ingresos más estables.

Repreguntado para que aclare cuánto tiempo duró la reparación de la maquina señalada: responde que desde fines de Agosto de 2017 hasta el día del accidente

Repreguntado para que aclare en qué momento de la prestación del servicio ocurrió el accidente: responde que fue cuando la empresa de transportes estaba realizando el traslado de la máquina, al final del trabajo.



Se le exhibe al testigo los siguientes documentos: Presupuesto de fecha 22 de Agosto de 2017; declaración de fecha 20 de Octubre de 2017 y boleta de honorarios de fecha 11 de Octubre de 2017. Todos documentos acompañados bajo el N° 9 del escrito de fecha 24 de Octubre de 2019, para que reconozca las firmas que en ellos se contiene como suya y la efectividad de los mismos. El testigo señala que reconoce las firmas como suyas y también la boleta de honorarios.

A continuación, se solicita que reconozca el testigo, los documentos antes indicados, incorporados en el sumario sanitario seguido en autos páginas, 61, 62, 63 y 92, conforme al documento acompañado por el Fisco de Chile en escrito de fecha 03 de Enero de 2019. El testigo señala que reconoce su firma en los documentos.

Contrainterrogado para que diga, el día y hora en que se produjo el accidente: responde que, le parece que el 13 de octubre de 2017 y no recuerda la hora, pero fue en la tarde, después de mediodía.

Contrainterrogado para que diga, en qué dependencias se produjo el accidente: responde que a un costado de la calle principal del terreno, que es donde estaba puesto el camión que trasladaría la máquina de vacío.

Contrainterrogado para que diga quién era el dueño del lugar: responde que no sabe, porque antes funcionaba Curtidos Bas. El lugar estaba vacío lo único que había era un portero.

Contrainterrogado para que diga porque lo contrató Fernando Bas para trabajar en ese lugar: responde que la máquina que estaba para reparar en ese lugar.

Contrainterrogado para que diga, de quién era la máquina a reparar: señala suponer que era de Fernando Bas, agrega que desconoce la parte legal, si era propiamente de él o no.

Contrainterrogado para que diga, a qué se refiere cuando dice que trabajaban solos en el lugar: responde que, eran los únicos que estaban ahí, desarrollando un trabajo.

Contrainterrogado para que diga, si no había nadie de la empresa Curtidos Bas en el lugar: responde que solo el portero.

Contrainterrogado para que diga, si alguien estaba supervisando el trabajo que estaba realizando con el accidentado: responde que no.

Contrainterrogado para que diga, cuál era la función del accidentado al momento del accidente: responde que la máquina tiene piezas grandes, que movió la empresa de transportes. La función era velar por recolectar las piezas pequeñas,



como flexibles, mangueras y tarros con pernos. Además, que no se rayaran las piezas recién pintadas.

Comparece don José Miguel Bas Mayo quien declara al tenor del punto de prueba número no (1°.- Si es efectivo que la reclamante incurrió en una falta imputable en los hechos que derivaron en el accidente con resultado de muerte sufrido por don Cristian Gabriel Urzúa.), que no es efectivo. Lo anterior, le constaría porque Curtidos Bas S.A, contrató a una empresa para hacer el traslado de las maquinarias; en el momento del accidente se estaba trasladando una máquina que tenía tres mesas de secado, no recuerda sus dimensiones, pero menciona que era grande. Se había hecho el traslado de dos mesas de la máquina, que habría visto personalmente cuando fueron trasladadas, y cuando se estaba trasladando la tercera mesa ocurrió el accidente. Indica que se encontraba en la oficina, emitiendo las guías necesarias para el transporte de la mesas y en ese momento sintió un gran estruendo y las personas que estaban ahí alrededor de la faena, lo fueron a buscar, saliendo a ver que se había producido el accidente.

Refiere que preguntó qué hacía el accidentado en el lugar, y una persona que no recuerda su nombre pero era el operador de la grúa, le dijo que el accidentado se abalanzó, se colgó de una de las esquinas de la mesa que se estaba trasladando que iba suspendida por la grúa, lo cual produjo un giro brusco de esta mesa, haciéndola golpear con un poste de luz que estaba a la orilla del camino de donde estaba realizando la operación. Ese golpe provocó que se aflojara una de los tirantes que afirmaban la mesa, se soltara y la mesa cayera bruscamente, aplastando a la persona que se había colgado, quien era el accidentado. Indica que la explicación la dio una persona que era el operador de la grúa, le dijo que el accidentado había gritado "se va a rayar la mesa ", para proteger que el trabajo no se dañara, refiriéndose al trabajo de mantención de pintura que ellos habían hecho. Agrega que estaba el operador de la grúa, los ayudantes de terreno de la empresa de transportes y el Sr. Sanhueza, que trabajaba haciendo la mantención y que estaba haciendo el trabajo con el joven que se accidentó.-

Repreguntado para que diga dónde físicamente ocurrió el accidente: Responde que en la calle principal interna de entrada a la empresa donde estaba estacionado el camión que iba a ser cargado con esa mesa.

Repreguntado para que diga, en qué dirección se encontraba el lugar señalado: responde que en Carlos Valdovinos N° 129, le parece que en la comuna de San Joaquín



Repreguntado para que aclare, si dentro de las personas que mencionó en su declaración que se encontraban presentes en el lugar donde ocurrió el accidente, habían trabajadores, operarios, de Curtidos Bas S.A.: responde que no, no había nadie de la empresa.

Repreguntado para que aclare, en qué consistían los servicios de mantención, indicados en su declaración, que habría realizado el Sr Sanhueza con el accidentado y que duración tuvieron: responde que eran para la mantención de las mesas en cuanto a su estructura metálica como a su pintura. No recuerda cuanto duraron los señalados trabajos.

Repreguntado para que diga, por qué se estaban trasladando la máquina donde ocurrió el accidente y si conoce el destino de ella: responde que dichas máquinas, iban a ser trasladadas a las instalaciones nuevas de la empresa reclamante en la comuna de Maipú.-

Repreguntado para que aclare si al momento del traslado, estas instalaciones nuevas ya estaban en funcionamiento: responde que se estaban armando en ese momento y parte estaban en funcionamiento.

Se le exhibe al testigo el documento denominado "Declaración sobre accidente fatal ocurrido en Planta San Joaquín," acompañado bajo el N° 12 el escrito de fecha 24 de Octubre de 2019, para que diga si reconoce la firma puesta en un documento: responde que sí es su firma y reconoce el documento.

Contrainterrogado para que diga, si el lugar donde se produjo el accidente era o no propiedad de Curtidos Bas: responde que, por lo que entiende, en ese momento estaba vendido el terreno.

Contrainterrogado para que aclare, si no vio el accidente: responde que, como ya lo mencionó, no lo vio.

Comparece Iván Humberto Salinas Bravo, quien al punto de prueba número uno (1°.- Si es efectivo que la reclamante incurrió en una falta imputable en los hechos que derivaron en el accidente con resultado de muerte sufrido por don Cristian Gabriel Urzúa.) declara, que no es responsable la reclamante del accidente sufrido por Cristian Gabriel Urzúa. Refiere que le consta, porque la empresa que estaba retirando las maquinarias era externa, las retiraban con una grúa porque tenían un camión afuera para cargarla. En el trayecto de ir a montar la máquina al camión, sucedió el accidente. Indica que no lo vio, pues estaba en la portería, ya que de eso se encargaba el día sábado. Añade que era cuidador y vivía dentro de la empresa y era el único que estaba ahí en la empresa. En ese momento, cuando pasó el accidente, señala haber visto un muchacho afuera hablando por celular,



era una persona de los que estaban sacando la maquinaria y le escuchó algo de muerte, entonces se preocupó y le preguntó lo ocurrido, a lo que le contestaron que había ocurrido un accidente con resultado de muerte. Después de ahí unos 15 minutos aproximadamente, fue al lugar que estaba a unos 80 mts., de la portería, y estaba solo, porque habían retirado todo en la empresa, quedaba esa última máquina. Señala que era un muchacho de los que habían hecho el trabajo el que falleció.

Repreguntado para que diga, si conoce el motivo por el cual la empresa de grúa que señaló estaba trasladando la maquina en cuestión en la cual se produjo el accidente, y si conoce el destino de las maquina trasladada: responde que fue porque se había cambiado la empresa, trasladado a la comuna de Maipú.

Repreguntado para que aclare si sabe cuándo se había traslado la empresa: responde en enero de 2017.

Repreguntado para que aclare el lugar físico, la dirección donde ocurrió el accidente: señala que era Avenida Carlos Valdovinos N° 129, San Joaquín.

Repreguntado para que aclare, si conoce los servicios que prestaba la persona accidentada y si sabe con quién los realizaba y la duración de los mismos: responde que estaba reparando y pintando la máquina del accidente, lo hacía con otra persona que era el primer testigo de acá, Sr. Sanhueza. El trabajo que hicieron duró como 2 meses. El accidentado estaba haciendo una pega dentro de Curtidos Bas, estaba haciendo una extra, fueron 2 meses. No sé quién le pidió que hicieran esa pega de mantención.

Contrainterrogado para diga, si la reclamante contrató al trabajador accidentado: responde que no.

Contrainterrogado para que diga, si la reclamante había contratado los servicios del accidentado: responde que no sabe.

Contrainterrogado para que diga, si sabe si la reclamante era dueña de la máquina que se estaba trasladando el día del accidente: responde que sí.

Contrainterrogado para que diga, si la reclamante era dueña de las dependencias donde se produjo el accidente y que Ud. cuidaba: responde que no sabría decirlo.

CUARTO. Que, la parte reclamada, acompañó a folio 8: Copia del Sumario Sanitario Expediente N° 98/2018.

QUINTO. Que, en virtud a los antecedentes y lo expuesto por las partes, son hechos no controvertidos de la causa, que se instruyó Sumario Sanitario en expediente N° 98 del año 2018, en contra de la reclamante empresa Curtidos Bas



S.A., por accidente fatal de don Cristián Urzúa, el que se encontraba realizando faenas en dependencias ubicadas en Avenida Carlos Valdovinos N° 129, por los hechos verificados el día 13 de julio de 2017, los que constan en Acta N° 0165888, suscrita por don Pablo Fierro Zapata como Ministro de Fe. Dicho sumario concluyó con la Resolución Exenta N° 005356 de fecha 07 de agosto de 2018, aplicándole una multa de 300 UTM a la empresa reclamante, suma que fuera rebajada a 200 UTM al acoger parcialmente el recurso de reposición presentado por la reclamante, conforme a la Resolución Exenta N° 007791 de fecha 16 de noviembre de 2018, en atención a los hechos consignados en el sumario administrativo.

SEXTO. Que, la parte reclamante alegó en primer lugar, que no existió relación de naturaleza laboral entre su parte y la persona accidentada, por lo que no son aplicables a su representada, las normas de higiene y seguridad contenidas en la legislación laboral y de seguridad social, entre otras, en el Código del Trabajo, la Ley 16.744 y los Decretos N° 40 y 574, como tampoco la Seremi de Salud tiene competencia para la investigación y sanción de accidentes no laborales; en segundo lugar, que no existió relación de subcontratación entre su representada y don Alfredo Sanhueza o la empresa de Grúas Marzan, respecto de las cuales sólo se celebraron contratos civiles para la prestación de servicios específicos y esporádicos, que no son propios del giro de su representada, por lo que no se cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 183 A y siguientes del Código del Trabajo para la existencia de trabajo en régimen de subcontratación; en tercer lugar, que ni la sentencia imputada ni el Acta, indicaron el tipo de responsabilidad que se le atribuye a su representada en las deficiencias constadas, ni se presentan cargos ni se condena a don Alfredo Sanhueza, quien fue la persona que contrató a la persona fallecida, por lo que no se le puede imputar responsabilidad como empresa principal, si no se imputó previamente responsabilidad al supuesto empleador de la persona fallecida; en cuarto lugar, se le aplica a su parte una multa de igual calor que a la otra empresa sumariada, no obstante que prácticamente la totalidad de las deficiencias constatadas, solo son aplicables a ésta última empresa y no su representada; en quinto lugar, el Acta de Inspección no hace alusión a las normas sanitarias infringidas por la reclamante, por lo que impide a su representada conocer las infracciones legales que se le imputan, y la sentencia dictada en el sumario sanitario carece de fundamentación en cuanto al monto de la multa aplicada.



Por su parte, la autoridad sanitaria, señaló sería suficiente para rechazar la reclamación de deducida, considerar que los hechos que motivaron la sanción sanitaria, sí se encuentran suficientemente comprobados en el sumario; que ellos constituyen una infracción a las leyes o reglamentos sanitarios, y que la sanción aplicada, corresponde y es proporcional a la infracción cometida, conforme lo desarrolla en la contestación a la reclamación.

SEPTIMO. Que, analizando el fondo del asunto, el artículo 171 del Código Sanitario establece que: *“De las sanciones aplicadas por el Servicio Nacional de Salud podrá reclamarse ante la justicia ordinaria civil, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, reclamo que tramitará en forma breve y sumaria. El tribunal desechará la reclamación si los hechos que hayan motivado la sanción se encuentren comprobados en el sumario sanitario de acuerdo a las normas del presente Código, si tales hechos constituyen efectivamente una infracción a las leyes o reglamentos sanitarios y si la sanción aplicada es la que corresponde a la infracción cometida.”*

Por su parte, el artículo 166 del Código Sanitario estatuye: *“Bastará para dar por establecida la existencia de una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios el testimonio de dos personas contestes en el hecho y en sus circunstancias esenciales; o el acta, que levante el funcionario del Servicio al comprobarla.”* Es decir, el legislador ha conferido al acta inspectiva, el mérito suficiente para dar por establecidos los hechos que en ella se contienen.

OCTAVO. Que en este orden de ideas, para resolver, el Tribunal debe limitarse a la competencia que le otorga el artículo 171 del Código Sanitario, a saber, determinar si los hechos que motivaron la sanción se encuentran comprobados en el sumario sanitario de acuerdo a las normas del citado cuerpo legal; si tales hechos constituyen efectivamente una infracción a las leyes o reglamentos sanitarios; y si la sanción aplicada es la que corresponde a la infracción cometida.

NOVENO. Que, en primer lugar y respecto a la alegación del reclamante en cuanto la SEREMI de Salud no tendría competencia para investigar y sancionar accidentes no laborales, cabe señalar que la potestad de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana para aplicar a la reclamante una multa e investigar el accidente en cuestión, emana de los artículos 3, 67, 68, 82 y 174 del Código Sanitario en cuanto la facultan para atender las materias relacionadas con las condiciones de saneamiento y seguridad de los lugares de



trabajo y de otros recintos, cualquiera sea su naturaleza, y no necesariamente se refiere a recintos laborales o siniestros de naturaleza puramente laboral, por lo que la alegación a este respecto será rechazada.

DÉCIMO. Que, así como se ha señalado en el considerando anterior, tanto la normativa del Código Sanitario como del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, es aplicable a la reclamante desde que su finalidad es evitar la ocurrencia de accidentes en los lugares en los que ejercen sus labores los trabajadores, sin importar si éstos son de la empresa dueña del recinto o de otra. En efecto, de la lectura de los artículos 36 y 37 del Decreto supremo N° 594/99, aparece que la obligación es respecto de cualquier persona que labore en el lugar, sin importar su dependencia.

UNDÉCIMO. Que, respecto a la alegación de que el Acta Inspectiva adolece de deficiencias al no haberse hecho alusión a las eventuales normas infringidas, como tampoco se estableció la forma en que fuera percibido por el fiscalizador o los medios instrumentales para dar cuenta del hecho consignado en el acta y base del sumario administrativo, cabe señalar que conforme lo establecido en la Resolución Exenta N° 126 del 13 de abril de 2012 del Ministerio de Salud, que prueba el manual de fiscalización sanitaria, en título I, acápite 3. Sobre el Levantamiento y Contenido del Acta de Inspección, letra c), indica que el acta debe contener *“Hechos que constituyen la eventual infracción a la normativa sanitaria presuntamente infringida y alusión a esta, con su respectiva denominación si fuere posible. El acta evitará cualquier juicio de valor sobre los hechos, además de toda la apreciación subjetiva de las circunstancias que rodean los hechos, los cuales serán señalados en la forma como fueron percibidos por los sentidos o los medios instrumentales que permitan su percepción”*. En consecuencia, de lo transcrito se puede concluir que la cita específica a las normas infringidas, es en la medida de lo posible, siendo suficiente hacer alusión a este. Asimismo, los hechos percibidos se deben señalar “en la forma”, es decir, tal cual como fueron percibidos y no de qué forma fueron percibidos, como lo alega erróneamente la reclamante, por lo que la alegación de la reclamante será rechazada.

Atendida la conclusión precedente, cabe señalar que constando en autos que el acta inspectiva N° 0165888 del 26 de julio de 2017, acompañada junto al Sumario Administrativo 98-2018, cumple los requisitos y por lo tanto, los hechos en ella consignados constituyen una presunción legal de veracidad de la existencia de



una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios, que, en todo caso, puede ser desvirtuada por otras pruebas, la obligación de desvirtuarlos recae sobre la reclamante; debiendo aportar esa parte, los antecedentes probatorios suficientes al efecto.

DUODECIMO. Que, como ya se ha señalado, la reclamante no ha controvertido los hechos que se habrían constatado y que constituirían las infracciones que se le atribuyen, si no que ha centrado su alegación en que no existió relación laboral directa ni de subcontratación, y que su relación con el fallecido es de naturaleza civil. Agregó, que no se habrían formulado cargos en contra de don Alfredo Sanhueza quien sería el empleador del trabajador fallecido, puesto que es con él que se celebró el contrato de prestación de servicio y era él quien le pagaría al accidentado y quien sería el principal responsable de asegurar la salud de sus trabajadores. Además, alegó que existiría un error en el hecho que se haya aplicado la misma multa a la empresa a su parte y a Grúas Marzam, puesto que las deficiencias constatadas en el sumario sanitario, corresponderían es su mayor parte a esta última.

DÉCIMO TERCERO. Que, así como se adelantara en el considerando décimo, y tal como lo ha sostenido nuestra Excelentísima Corte Suprema, al analizar de forma sistemática tanto el Código Sanitario como el Decreto Supremo 594 del Ministerio de Salud, Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, aparece que la finalidad de sus disposiciones es velar porque en los lugares de trabajo existan condiciones sanitarias y ambientales que resguarden la salud y el bienestar de *"las personas que allí se desempeñen"*, fórmula ésta mucho más amplia que la simple referencia a trabajadores dependientes.

Lo concluido de este análisis, es que la norma no se aplica a los trabajadores, sino al lugar de trabajo en sí y, por ende, si ese lugar no tiene las condiciones adecuadas, la empresa incurre en falta, sea quien sea el que específicamente resulte perjudicado por el eventual accidente derivado de la infracción. Esto, porque las normativa sanitaria y su reglamento, no es una norma laboral sino de salubridad, de forma tal que sus disposiciones se aplican a los lugares de trabajo, más allá de quienes sean los propietarios de la empresa o quienes laboren en ella de manera permanente o transitoria. Además, atendido que el sentido de la norma es la protección de la salud, con el objeto de minimizar las condiciones de riesgo



para esta, no tendría sentido que su articulado solo fuese aplicable a los trabajadores dependientes y no a los que se desempeñen a honorarios.

Refuerza la idea anterior lo estatuido en el artículo 36 del Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, al señalar que se busca evitar daños *“a las personas”*

DÉCIMO CUARTO. Que, en conclusión, la infracción establecida legítimamente en el proceso administrativo adecuado para ello, no es ilegal ni arbitraria, pues se fundamenta en la infracción de una norma sanitaria y no laboral, sobre hechos que en este proceso, no se controvierten.

Así, con el mérito de la copia del Sumario Administrativo acompañado en autos, a folio 8, y la prueba aportada por la reclamante, todas ellas ponderadas de conformidad con los artículos 1700 del Código Civil y 342 N° 2 y 3 del Código Civil, se advierte que no ha sido desvirtuado por el reclamante el fundamento fáctico de las infracciones que se le atribuyen, atendido que su reclamación se centra en la inexistencia de una relación laboral o de subcontratación con el fallecido por lo que su parte carece de responsabilidad en los hechos y por ende no se le aplica lo dispuesto en el Código del Trabajo, Ley N° 16.744, Decreto Supremo N° 40, Decreto Supremo N° 574, ni la Seremi tiene competencia para la investigación de accidentes no laborales, todo lo cual ya fue analizado.

Ahora, en cuanto a la alegación particular de que no todas las infracciones constatadas le son aplicables a su parte, cabe señalar que si bien es efectivo en los casos en que particularmente se le imputaron directamente a la empresa Grúas Marzam, no es menos acertado, que la conducta por la cual se sancionó a la empresa reclamante se encuentra debidamente encuadrada en las disposiciones que le imponían la obligación de mantener las medidas de seguridad orientadas a evitar accidentes que importaran un riesgo para la vida de los trabajadores y de terceros en general, según lo contemplado en las previsiones de orden legal y reglamentario que se han reseñado, en particular con un accidente que pudo ser claramente evitable con una adecuada supervisión y procedimientos de trabajo seguro, de los que la reclamante no puede desentenderse.

Por último, y en específico respecto a la alegación que el cargo N° 2, respecto a las maniobras de izaje de cargas superiores a 20 toneladas, cabe señalar que el sumario administrativo textualmente señala que la imputación es de cargas superiores a 2.0 toneladas (dos) y no 20 (veinte) como erróneamente señala la reclamante, no siendo necesario mayor análisis.



En consecuencia, las consideraciones expuestas permiten estimar que la sanción reclamada se ajusta a la normativa sanitaria, de modo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 inciso segundo del Código Sanitario, que dispone que “El tribunal desechará la reclamación si los hechos que hayan motivado la sanción se encuentren comprobados en el sumario sanitario de acuerdo a las normas del presente Código, si tales hechos constituyen efectivamente una infracción a las leyes o reglamentos sanitarios y si la sanción aplicada es la que corresponde a la infracción cometida”. Así razonado y estimándose que los hechos que motivaron la sanción se encontraban comprobados en el sumario sanitario, deberá rechazarse la petición principal de la reclamación deducida.

DECIMO QUINTO. Que, de la misma forma se rechazará la solicitud subsidiaria de rebaja de la multa, por cuanto aparece que pudiendo ésta llegar a las 1000 UTM, se optó por una notoriamente inferior, 200 UTM, y que esta sentenciadora estima concordante con la infracción cursada, e incluso, que esta es moderada dentro del canon que se permite sancionar, en atención a que, como ya se dijo, las infracciones no lograron ser desvirtuadas por la reclamante, por lo que esta solicitud será rechazada.

DÉCIMO SEXTO. Que, conforme lo dispone el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, y habiendo sido totalmente vencida, la reclamante será condenada en costas.

Y, visto además lo dispuesto en los artículos 161, 164, 171 y demás pertinentes del Código Sanitario; 37 y 53 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de Trabajo aprobado por el D.S 594/99 del Ministerio de Salud, Ley 16.744 y artículos 160, 170, 341, 342 y 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Que, se RECHAZA la reclamación en contra de la Resolución Exenta N° 005356 de fecha 07 de agosto de 2018 y la Resolución Exenta N° 007791 del 16 de noviembre de 2018, dictadas en el Sumario Sanitario 98-2018.

II.- Que, se RECHAZA la solicitud subsidiaria de rebaja de multa, quedando fijada en la suma de 200 Unidades Tributarias Mensuales.

III.- Que, la reclamante será condenada en costas.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.-

DESE COPIA A LAS PARTES, SIN COSTO ALGUNO PARA ELLAS.-



Dictada por Doña Gabriela Silva Herrera, Juez Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiocho de septiembre de dos mil veinte.**

